

Imprimir

Gran parte de las zonas rurales de Colombia están inmersas en una perversa paradoja: están rodeadas de enormes cantidades de recursos hídricos, pero no pueden abrir una llave y recibir agua potable para su consumo y sus necesidades diarias. Y esto, porque no existe infraestructura para conectarlos a este servicio público esencial. Situación que se agravó desde que entregamos, bajo la seguridad inversionista, nuestros territorios a las mineras para que envenenaran con cianuro, ácido sulfúrico, arsénico, plomo o mercurio nuestras fuentes hídricas.

Pero a pesar de todo el daño ambiental que ha sufrido el país en los últimos años, aún tenemos un rendimiento hídrico seis veces mayor que el promedio mundial y poseemos el 50% de los páramos del planeta. Es decir, somos afortunados de contar con la mitad de las principales fábricas de agua vital para la vida, pero a la vez poseemos una desafortunada inconsciencia para valorar nuestra verdadera riqueza, que se nos escapa día a día entre los largos dedos de transnacionales depredantes.

Naciones Unidas ha advertido la llegada de una inminente crisis mundial de escasez de agua potable, al punto que en pocos años se prevé que la mitad de la población afrontará escasez de agua en sus territorios, es decir que nos estamos condenando a morir de sed mientras la humanidad se dedica a acumular oro.

Colombia tiene hoy más de 400 municipios con riesgo de escasez de agua, pero se ufana de contar con una cobertura general de servicio de acueducto de más del 90%, que corresponde principalmente a la conexión urbana, donde en ciudades como Bogotá llega ya al 98%. Pero cobertura no es garantía de continuidad y sostenibilidad del servicio, por eso descuidar las zonas rurales y actuar de espaldas a la protección del agua, de las selvas, de los páramos, de los humedales, de las reservas forestales o simplemente hacer caso omiso a la lucha contra el cambio climático, nos condenará irremediablemente a tener redes que llegan en forma de tuberías a las cocinas, baños, duchas y grifos de la casa, pero sin el líquido vital que rápidamente estamos acabando por nuestro descuido de las fuentes hídricas.

La crisis de agua que sufrió Bogotá el año pasado es un primer campanazo de alerta de lo

que está por venir, tanto por nuestra negligencia frente a los reservorios de agua propios de la Capital, como son humedales sepultados por el cemento de alcaldes que se hicieron elegir con el rótulo de Verdes. Como por la interacción de las lluvias que llegan al altiplano cundiboyacense y surten de agua embalses como Chingaza, en una conexión regional y mundial, donde no hemos logrado entender que lo que sucede, por ejemplo, en el Amazonas, nos afecta a todos, incluidos a los bogotanos y bogotanas.

El río Amazonas, el río más grande del mundo, se secó el año pasado, fruto de la destrucción de sus ecosistemas estratégicos por la tala de selva, la minería, la ganadería extensiva y los primeros efectos irreversibles del cambio climático. Y de ahí vino una de las principales causas que afectó las existencias de agua en la Capital, ya que de esa conexión bioexistencial entre selvas, bosques y reservas de agua, hacen parte fundamental los llamados “ríos voladores”, que ha mencionado el presidente Petro y han causado risas ignorantes en un sector palurdo de la oposición.

Los ríos voladores son un fenómeno vital, que conecta, en este caso, a la Amazonía con el Océano Atlántico y a los Andes. En el océano Atlántico se produce una gran evaporación de agua que colma las nubes de humedad, nubes que viajan impulsadas por los vientos Alisios hacia el Amazonas, donde se descargan e integran a la gran cantidad de agua que produce la selva del Amazonas, una selva densa con más de 600 mil árboles reteniendo y transpirando agua. En el Amazonas las nubes vuelven a ser cargadas de miles de millones de litros de agua y parte importante de estos ríos voladores viajan nuevamente impulsados por los vientos Alisios hacia los Andes, donde las bajas temperaturas los condensan y caen en forma de lluvia sobre la cordillera oriental y sus áreas de influencia.

Este es el origen de la crisis que sufrió Bogotá en 2024, donde el nivel de agua de los embalses de Chingaza llegó a una situación grave, que produjo racionamientos diarios y nos llevó a un debate sobre la seguridad hídrica de la Capital, pendiente aún de resolver.

En Colombia más de 12 millones de personas, esencialmente de las zonas rurales, no tienen acceso a agua potable, fruto de lo cual viven bajo situaciones de salubridad dramáticas, que

cobran la vida de miles de niños, como en la Guajira o el Chocó. Más de un millón y medio de personas no tienen baterías sanitarias y hacen sus necesidades fisiológicas al aire libre. A pesar de los avances tan solo el 52% de las aguas residuales son tratadas. Y el cambio climático amenaza con una crisis de ausencia de agua, en cada vez más territorios vulnerables por falta de previsión.

La emergencia climática ha llegado a agravar más la situación porque las sequías generadas por fenómenos cada vez más intensos, como el fenómeno del Niño, afectan no solo los niveles de los embalses, sino también de la generación de energía de las hidroeléctricas, la principal fuente de energía en Colombia, con lo cual el riesgo que existe es que nuevamente la corrupción, la negligencia y el clima, nos lleven a un apagón como el que sufrimos en el año 1992 y parte de 1993, donde por un año regresamos a la Colombia que se acostaba a las 7 de la noche, se adelantó la hora para aprovechar la luz del sol y las velas, las linternas y la radio de pilas fueron los productos básicos en cada hogar, mientras el PIB perdía 2.5 puntos porcentuales, el país se atrasaba y el entonces presidente Gaviria nos decía “Bienvenidos al Futuro”.

Gabriel Bustamante Peña, Presidente del Instituto de Ética Pública y profesor universitario

Foto tomada de: iAgua